

Expansión del cultivo de la soja, “pampeanización” productiva y movimientos socio-territoriales: la experiencia del MOCASE.

Esteban Salizzi.

Cita:

Esteban Salizzi (2011). *Expansión del cultivo de la soja, “pampeanización” productiva y movimientos socio-territoriales: la experiencia del MOCASE. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-034/660>

Expansión del cultivo de la soja, “pampeanización” productiva y movimientos socio-territoriales: la experiencia del MOCASE

Esteban Salizzi

Instituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

esalizzi@hotmail.com

RESUMEN

El presente trabajo analiza la experiencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) con la intención de realizar un aporte al estudio de la acción colectiva en Argentina, donde los movimientos de protesta social han tendido a concentrar gran parte de su accionar en sus prácticas territoriales, entendidas como esferas de afirmación identitaria desde las que reafirman y adecuan el carácter de sus demandas y acciones políticas. La problemática que se estudia está enmarcada en un contexto caracterizado por la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal -implementadas a mediados de 1970 y profundizadas en la década de 1990- que conducen al desarrollo de dos procesos espaciales: la “agriculturización/sojización” al interior de la Región Pampeana, y la “pampeanización” de la producción caracterizada por la exportación del modelo pampeano -y de la soja- hacia zonas extrapampeanas. La expansión de la frontera agraria, que ocasionó el desplazamiento de pequeños productores y sectores campesinos, condujo en Santiago del Estero a la movilización popular conocida como "Grito de Los Jurés", antecedente más significativo al surgimiento del MOCASE. Para desarrollar el análisis en cuestión se retoma la propuesta teórico-metodológica de F. Schuster -que propone articular las teorías de los movimientos sociales y las teorías de las protestas-, debido a que si bien la identidad por sí sola no da cuenta de los complejos y fragmentados episodios de acción colectiva, tampoco alcanza con pensarlos como meras asociaciones circunstanciales de intereses bajo el cálculo de la racionalidad estratégica.

Palabras clave: MOCASE, pampeanización, movimientos socio-territoriales, protesta, soja.

INTRODUCCIÓN

La presente ponencia se encuentra enmarcada dentro del estudio de las experiencias de acción colectiva en Argentina. Donde los movimientos de protesta social han tendido a concentrar gran parte de su accionar en sus prácticas territoriales, entendidas como esferas de afirmación identitaria desde las cuales reafirman y adecuan el carácter de sus demandas y acciones políticas.

El objetivo que se persigue es analizar la experiencia desarrollada por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) -que posee como ejes centrales la lucha por la tenencia de la tierra y la dignificación de la vida de

las familias campesinas-, tomando como modelo la propuesta teórico-metodológica para el estudio de la acción colectiva que propone F. Schuster en su artículo *Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva* (2005). Fundamentalmente, se retoman sus planteos acerca de la necesidad de lograr algún tipo de articulación entre las teorías de los movimientos sociales -que han recibido su mayor impulso de los trabajos de la sociología europea- y las teorías de las protestas -que han sido principalmente desarrolladas por la sociología política norteamericana-. Según el autor, la razón que explica esta apuesta radica en que si bien la identidad por sí sola no da cuenta de los complejos y fragmentados episodios de acción colectiva, tampoco alcanza con pensar a éstos como meras asociaciones circunstanciales de intereses bajo el cálculo de la racionalidad estratégica. Asimismo, este interés se encuentra en concordancia con las propuestas desarrolladas por representantes reconocidos de ambas corrientes tales como Laraña y Gusfield (1994), Melucci (1994), Tarrow (1997), Tilly (1998), McAdam, McCarthy y Zald (1999), McAdam, Tarrow y Tilly (2001), entre otros (Schuster, 2005).

A modo de contextualización general, se parte del supuesto de que la conjugación de los factores internacionales derivados de la modificación del régimen de acumulación vigente hasta mediados de los años setenta y de las reestructuraciones en el plano de la economía y el Estado impulsadas por la última dictadura militar argentina (1976-1983), acentuadas luego por las políticas implementadas en los años 90, produjo el pasaje a un modelo social caracterizado por una fuerte transformación en las pautas de integración y exclusión social, que generó el ingreso a la precariedad de vastos contingentes poblacionales (Tobio, 2009). Situación que según J. Nun, sin conducir necesariamente a una explosión generalizada de la protesta social, continúa multiplicando los conflictos, especialmente de índole defensiva (Nun, 2000). Asimismo, esta última afirmación se encuentra en correspondencia con lo señalado por I. Izaguirre acerca del incremento del conflicto social que ha tenido lugar a lo largo de la década de 1990 en el territorio latinoamericano (Izaguirre, 2003).

Para alcanzar el objetivo señalado se considera necesario en primer lugar analizar sintéticamente la propuesta desarrollada por F. Schuster, a fin de reconocer las principales categorías teóricas que conforman su abordaje.

En segundo lugar, se busca reconstruir los acontecimientos históricos y las transformaciones socioterritoriales que dieron lugar a la creación del MOCASE, siendo el antecedente más significativo en su conformación la movilización popular que tuvo lugar en la localidad de Los Jurés y que se denominó como "Grito de Los Jurés" (1986).

En tercer lugar, se pretende analizar la experiencia desarrollada por el MOCASE a través de la utilización de los elementos teórico-metodológicos enunciados por F. Schuster para el estudio de la acción colectiva.

Finalmente, se busca alcanzar conclusiones significativas acerca de la problemática planteada, haciendo especial hincapié tanto en las condiciones y desafíos que enfrenta el MOCASE en la actualidad en tanto movimiento social,

como en la relevancia de estudiar la acción colectiva en la Argentina contemporánea.

PROPUESTA PARA EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA

Movimientos sociales y protestas

El estudio de la acción colectiva -cualquier acción que requiere de la participación cooperativa de al menos dos individuos- es en la actualidad uno de los grandes temas de análisis de las ciencias sociales. Desde que se desmoronaron las certezas acerca de los sujetos colectivos homogéneos -que habían dominado casi un siglo de conocimiento- movimientos sociales y protestas comenzaron a constituir un auténtico y novedoso problema de estudio (Schuster, 2005).

Según F. Schuster, con posterioridad a la crisis relativa del concepto de clase para dar cuenta de la acción colectiva, surge la noción de movimiento social para hacer referencia a la aparición de fuerzas sociales que se mostraban en el espacio político bajo formas de constitución no clasista y con reclamos novedosos (Schuster, 2005); siendo sus principales exponentes los movimientos ecologistas, feministas, fundamentalistas religiosos, nacionalistas y localistas (Castells, 1998).

Sin embargo, este concepto se ha mostrado demasiado rígido para la gran variedad de acciones colectivas que se presentan en la actualidad; puesto que para reconocer un movimiento social se debe poder establecer una continuidad en un conjunto relativamente homogéneo de acciones colectivas¹ que: 1) permita hablar de una identidad común, 2) que dicha identidad muestre continuidad a través del tiempo (incluyendo períodos de latencia), 3) que exista una expansión espacial del sistema identitario de acciones, y 4) que la línea de identidad de las acciones pueda reconstruirse a través de sus sucesivas emergencias y ocultamientos. No obstante, existe una considerable serie de formas de acción colectiva que no se ajustan a estas nociones, debido a que sus protagonistas suelen asociarse y dejar de hacerlo en lapsos breves de tiempo y en espacios fuertemente localizados, sin constituir necesariamente identidades continuas en el espacio-tiempo (Schuster, 2005). Es con la intención de abordar su estudio que se incorpora el concepto de protesta social, cuya definición podría sintetizarse a “...*los acontecimientos visibles de acción política contenciosa de un colectivo, orientados al sostenimiento de una demanda (en general con referencia directa o indirecta al Estado)*...” (Schuster, 2005:56)-.

Las teorías de la protesta consideran a la racionalidad estratégica como la clave explicativa, debido a que entienden por acción colectiva todo resultado de la asociación de individuos con intereses comunes que desarrollan estrategias colectivas -en tanto estrategia racionalmente calculable- con la finalidad de optimizar las probabilidades de éxito en la satisfacción de sus preferencias. Con la inclusión de la categoría protesta social Schuster completa el marco teórico compuesto por las dos teorías que considera dominantes en el estudio

de la acción colectiva, y pone de manifiesto la necesidad de alcanzar algún tipo de articulación entre ambos enfoques, que permita integrar conceptos objetivos y subjetivos en el intento de poder comprender y explicar sus características actuales (Schuster, 2005).

Comúnmente, suele entenderse a la protesta social como una expresión visible de los movimientos sociales; sin embargo la idea de movimiento remite a un carácter de continuidad que la protesta no necesariamente posee. Puede desarrollarse no necesitando la constitución previa de ningún movimiento social que la genere, al tiempo que puede no derivar necesariamente en un movimiento que la continúe. De modo que se considera que la protesta “...puede carecer de sujeto o ser ella misma su propio sujeto, según se prefiera...” (Schuster, 2005:49).

Según Schuster, resulta incorrecto pensar que la identidad política de los actores puede ser explicada en forma completa por su base social -estructural-. Considera que su aparición es un hecho contingente en el que tiene lugar una ruptura de las rutinas del orden social, es el surgimiento del momento político, un hecho puramente histórico por el cual un sujeto resulta de un acto que habría podido no acontecer. De este modo, la identidad de los actores se establece durante la acción misma e imprime su marca sobre las identidades y las rutinas sociales ordinarias, suponiendo una operación compleja de generalización que no se deriva mecánicamente de la estructura social. El sujeto, entendido como identidad colectiva con efectos políticos y sociales, es entonces un producto de la acción y no a la inversa. Asimismo, la conexión entre las condiciones de una acción de protesta y la acción misma es indeterminable; lo que significa que, incluso si hubiera una conexión entre ellas, la derivación de la acción a partir de sus condiciones es radicalmente contingente (Schuster, 2005).

Cada protesta puede ser estudiada e individualizada según sus características particulares, sin embargo adquiere un sentido mayor en la medida en que se encuentra emparentada con otras acciones. De modo que, una protesta remite a otras, mostrando rasgos comunes y particularidades que son la base a partir de la que pueden reconstruirse redes de protestas. Este concepto resulta de cabal importancia para ampliar el espectro interpretativo de la acción colectiva, dado que se considera a la red de protestas como el eslabón que permitiría enfocar la mirada hacia la potencial conformación de un movimiento (Schuster, 2005).

Dimensiones para el análisis de la protesta

Partiendo de los supuestos teóricos antes mencionados, F. Schuster señala que existen cinco dimensiones de análisis que deben tenerse en consideración a la hora de abordar el estudio de la protesta social.

La primera dimensión es la *historia o matriz identitaria* de los actores de la protesta, o de la protesta en sí. La misma está vinculada con la indagación acerca de quiénes son los individuos o grupos que la conforman, tratando de trazar la genealogía de la acción colectiva bajo estudio (Schuster, 2005). Para

su análisis se parte del supuesto de la existencia de una apelación a identidades pasadas, teniendo como finalidad la identificación del conjunto de elementos simbólicos sobre los que se apoyan los actores de la protesta. La matriz identitaria tiene carácter político, es histórica y puede considerarse que es producto de un proceso de sedimentación.

La segunda dimensión hace referencia a las *condiciones o configuraciones estructurales*, que remite tanto a las condiciones internas como externas de constitución de los agentes de la acción colectiva -condiciones sociales, económicas, políticas o culturales-; así como también incluye el marco de oportunidades en el que la acción tiene lugar -la situación política, la fortaleza o la debilidad relativa del contendiente o de la propia organización de protesta, entre otras variables- (Schuster, 2005).

La tercera dimensión es la *demanda* que se sostiene en la protesta, en otras palabras qué pide el sujeto y cómo lo hace. Este elemento es de suma importancia no sólo a la hora de definir el tipo de acción y su relación con la identidad o las relaciones estructurales, sino también a los fines de dilucidar el rango de alternativas que deja a las negociaciones (Schuster, 2005).

La cuarta dimensión que propone remite al *formato*, que consiste en el modo en que la protesta aparece en la escena pública. Abarca aspectos a la vez estéticos y estratégicos de la acción colectiva, por lo que resulta una instancia de integración de los factores de identidad y racionalidad, a través de la elección del modo más eficaz para actuar con el fin de obtener el resultado deseado. El formato deriva también de las tradiciones e historias subjetivas de los individuos y grupos que actúan, por lo que su análisis permite profundizar la comprensión de las otras dimensiones planteadas y es importante para comprender, entre otras cosas, la identidad de la protesta y su forma de organización (Schuster, 2005).

La quinta y última dimensión que menciona es la *performatividad*, que consiste en definir el impacto político de la protesta. Parte de considerar que la acción colectiva, a partir de su inscripción en el espacio público, puede exhibir diversos efectos -materiales o simbólicos-, capaces de transformar las condiciones políticas del orden social. Constituye la capacidad inherente a toda enunciación pública de redefinir las reglas y los recursos que conforman el campo simbólico dentro del cual se produce y se reconoce. Su análisis permite definir la emergencia de nuevos actores, la formulación de nuevos problemas, la elaboración de nuevas estrategias discursivas en relación con problemas preexistentes, entre otros (Schuster, 2005).

Finalmente, cabe señalar que según F. Schuster el análisis que se elabora a partir de estas categorías da lugar a un momento de integración conceptual compleja, que permite a su vez conformar modelos o matrices típico-ideales de protestas. Sin embargo, a los fines del presente trabajo se utilizan las dimensiones anteriormente mencionadas, al igual que otros postulados teórico-metodológicos que propone el autor, para describir y analizar la experiencia desarrollada por el MOCASE.

EL SURGIMIENTO DEL MOCASE

Los orígenes del conflicto:

Desde mediados de la década de 1970 y específicamente como parte de las medidas impuestas por la última dictadura militar, se aplicaron políticas económicas de corte neoliberal -luego profundizadas en la década de 1990- que implicaron para el sector rural, entre otras cosas, la implementación de nuevas formas de organización de la producción, la intensificación del cambio tecnológico iniciado en 1960, la adopción de nuevas formas de comercialización y de transporte, el retroceso de las regulaciones estatales, la apertura de las fronteras a la importación y exportación de productos agrícolas, la prioridad a los productos de exportación de grandes y medianos agricultores. Estas medidas afectaron especialmente a los pequeños productores y a los agricultores campesinos, conduciendo a que su situación se hiciera cada vez más frágil o que incluso desaparecieran del escenario rural nacional (Barsky y Pucciarelli, 1997; Barbeta y Lapegna, 2002).

A partir de estas transformaciones, pero principalmente a raíz de las innovaciones tecnológicas -combinación de agroquímicos, fertilizantes y semillas híbridas-, se produjo una intensificación en el uso de la tierra que elevó su productividad y provocó el desencadenamiento de dos procesos espaciales que resultan de interés: la “agriculturización/sojización” que tuvo lugar al interior de la región pampeana, provocada por el desplazamiento de la ganadería a partir de la expansión de la soja y de los cultivos tradicionales (Manuel-Navarrete, et al. 2005, Pengue 2009, O. Barsky y Dávila 2008); y la “pampeanización” de la producción que tuvo lugar hacia el exterior, caracterizada por la exportación del modelo pampeano -y de la soja- hacia zonas extrapampeanas (principalmente hacia el sector norte del país) imponiendo así un paquete tecnológico completo y mucho más agresivo como consecuencia de los insumos adicionales que se aplicaron -herbicidas, fertilizantes, insecticidas- (Reboratti 2006, O. Barsky y Gelman 2009, Pengue 2009). Fenómenos que se profundizaron en las décadas posteriores a 1990, a partir de los avances en tecnología genética y de la implementación de la siembra directa, y que tuvieron consecuencias directas tanto sobre las estrategias productivas tradicionales como sobre los sectores sociales a ellas vinculados. Una de las provincias más afectadas fue sin duda Santiago del Estero.

Las transformaciones que empezaron a operarse en la provincia de Santiago del Estero desde mediados de la década de 1960 repercutieron fuertemente en la revalorización de las tierras, como consecuencia de la expansión de la frontera agropecuaria impulsada por el ciclo favorable de la ganadería pampeana entre 1960-1970. Se introdujeron cultivos orientados a la exportación -poroto y soja-, que antes se concentraban en las provincias periféricas. Esta expansión significó la introducción de firmas provenientes de Salta y Tucumán, que basaron su producción en un uso intensivo de capital, no modificando la demanda de mano de obra ni generando un aumento de los salarios. Otras consecuencias que pueden mencionarse fueron el desmonte,

que restó el recurso de la leña a los pobladores locales y dificultó la cría de ganado caprino, y la concentración de la propiedad de la tierra (Barbetta y Lapegna, 2002).

La expansión de la frontera agropecuaria implicó el desplazamiento y desalojo de sectores campesinos que poseían una tenencia precaria de la tierra -ya sean poseedores inscriptos a favor de un particular, porque no se hacía juicio sucesorio y el inmueble pasaba a ser un bien mancomunado de los herederos, u ocupantes de predios fiscales-, dado que las empresas interesadas comenzaron a reclamar como propias tierras ocupadas por ellos. Este conjunto de situaciones configuraron el escenario donde se desarrollaron los primeros conflictos por el territorio (Barbetta y Lapegna, 2002).

Hasta mediados de la década de 1980 se había evidenciado una situación de “exclusión silenciosa”, dado que la los abusos y la coacción del gobierno provincial y de las empresas generaba una violencia social que no habilitaba el surgimiento de un conflicto ni la construcción de un antagonismo, debido a que una de las partes no reclamaba por sus derechos. Esta realidad comenzó a transformarse con la emergencia de organizaciones no gubernamentales que - en su mayoría ligadas a una labor pastoral y social tanto de las parroquias locales como de los obispados católicos- promovieron la conformación de equipos de apoyo y de promoción rural y comenzaron a trabajar tanto con los campesinos como con otros sectores sociales subordinados de la estructura agraria santiagueña. Este fenómeno fue contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad civil en general y del movimiento campesino en particular, en sus reivindicaciones por la propiedad de la tierra (Barbetta y Lapegna, 2002).

El “Grito de Los Juríos”

En la década de 1980 en la ciudad de Los Juríos, perteneciente al departamento santiagueño de General Taboada, en ocasión de un intento de desalojo de alrededor de 400 familias que ocupaban aproximadamente 120.000 hectáreas, los damnificados recurrieron a un sacerdote católico de la zona (Roberto Killmeate); que acompañado de técnicos del Instituto de Cultura Popular (INCUPPO), de abogados y de organismos de derechos humanos (Servicio de Paz y Justicia) ayudó a los campesinos a organizarse y a resistir (Dargoltz, 1997; Michi, 2010; Díaz, 2005; Barbetta, 2009).

La movilización popular que se realizó en esa ciudad el 29 de octubre de 1986 reunió a más de 1.500 campesinos de la zona y de otros lugares de la provincia, que lentamente fueron llegando a la plaza central para reclamar la entrega de los títulos de propiedad correspondientes a las tierras por ellos ocupadas. Protagonizaron así -luego de soportar por años la represión, los desalojos y la violencia- una histórica marcha sin antecedentes en la provincia (Dargoltz, 1997). Se evitó de este modo el desalojo de las familias, a las que se les entregó en propiedad predios de entre 17 y 27 has., superficie sin embargo muy alejada de las 100 has. que reclamaban ante el gobierno y los empresarios (Michi, 2010).

Dicha experiencia tuvo como resultado la consolidación de una identidad colectiva -constituida bajo el denominador común del trabajo subordinado, mal pago, no calificado y poco remunerativo-, que permitió avanzar en una ampliación de sus reivindicaciones sobre aspectos productivos y de comercialización, en el surgimiento de cooperativas para fortalecer los aspectos económico-productivos, y en la conformación de organizaciones campesinas de base; revirtiendo la situación de “exclusión silenciosa” antes señalada, al demostrar que con lucha y organización era posible modificar las condiciones de existencia de los sectores afectados (Barbetta, 2009; Pereyra, 2010).

La conformación del MOCASE

Desde la década de 1980 en Santiago del Estero, provincia con una población campesina significativa en términos numéricos² y en una situación de dependencia productiva, pobreza, y acoso por el avance de las empresas agropecuarias; se fueron conformando estructuras organizacionales zonales y departamentales (Michi, 2010). El 1 de diciembre de 1989, a tres años del “Grito de Los Jurés”, se reunieron en esta localidad los representantes de diversas organizaciones e iniciaron una serie de encuentros con el objetivo de compartir experiencias y de ir conformando una organización provincial. Luego de este encuentro organizaron otros en Forres, Colonia Dora, Añatuya, y nuevamente en Forres, para finalmente, el 4 de agosto de 1990, constituir formalmente en la ciudad de Quimilí el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE). Se organizó en comisiones de base a nivel local que confluían en comisiones centrales de nivel zonal, en las que existían también otro tipo de agrupaciones tales como cooperativas y uniones campesinas (Barbetta y Lapegna, 2002; Michi, 2010).

Desde entonces las experiencias desarrolladas por el MOCASE permitieron observar una capacidad manifiesta para movilizar a una multiplicidad de organizaciones, instituciones solidarias y medios de comunicación, con el fin de evitar los desalojos; alcanzando la capacidad de imponer un reconocimiento en la comunidad para denunciar y confrontar las situaciones que se venían desarrollando en la provincia (Barbetta, 2009).

No obstante, pese a haber protagonizado un destacado proceso de expansión - no sólo ampliando la presencia territorial, sino también por el desarrollo de una extensa red de relaciones con otras organizaciones e instituciones locales, nacionales e internacionales- el movimiento se dividió a principios de 2002. Su ruptura significó la conformación de dos organizaciones con evidentes diferencias en cuanto a la forma organizativa, las estrategias, los recursos y los grupos de apoyo (Barbetta, 2009), pero con una clara continuidad en sus demandas.

Una de ellas conservó el nombre MOCASE y mantuvo la misma estructura, nucleando organizaciones campesinas de base de distintos departamentos provinciales; cuyos delegados pasaron a componer una mesa provincial que se reunía mensualmente y funcionaba como espacio de intercambio y discusión. Mostrando un acercamiento al Estado, se trataba de una organización cercana

al Programa Social Agropecuario (PSA) -dependiente en ese momento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)-, siendo muchas de sus organizaciones de base surgidas a partir del programa. Finalmente, cabe mencionar que esta organización mantuvo sus vínculos con la Federación Agraria Argentina (FAA) hasta el año 2008, cuando la conformación de la denominada “mesa de enlace”³ con motivo del conflicto “campo-gobierno”, produjo su alejamiento (Barbetta, 2009).

Por su parte, el MOCASE-VC (Vía Campesina)⁴ procuró una organización descentralizada, abierta a la participación de todos los campesinos. Se buscó entonces la conformación de una organización horizontal, participativa, sin presidencialismo, que funcionara con secretarías, siguiendo el mandato de las bases, con autonomía del gobierno nacional y provincial; en definitiva, una organización de lucha y resistencia donde se tomaran las decisiones por consenso, con una dirección colectiva. Y se enfocó su actividad a nivel nacional articulando acciones con movimientos de desocupados y con otras organizaciones campesinas e indígenas (Barbetta, 2009). Se consolidaron así las tres dimensiones más representativas de su reclamo actual: la resistencia por la propiedad de la tierra, los espacios de autogobierno y autogestión, y la constitución del movimiento como actor político provincial, nacional e internacional (Michi, 2010).

ANÁLISIS TEÓRICO DE LA EXPERIENCIA DEL MOCASE

A partir de los elementos teórico-metodológicos antes presentados y habiendo reconstruido la conformación del MOCASE, se propone a continuación un análisis teórico de la experiencia desarrollada por este movimiento. A tal efecto, resulta apropiado adoptar el triángulo explicativo propuesto por F. Schuster; no como una fórmula a la que puede reducirse el devenir de la acción colectiva en general -a modo de explicación universal-, sino señalando que los conceptos de protesta, red de protesta y movimiento social ofrecen la posibilidad de organizar su abordaje en diferentes planos interrelacionados.

La protesta social y sus dimensiones: el “Grito de Los Juríes”

La más representativa y la primera en orden cronológico de las acciones colectivas de protesta que tuvieron lugar en Santiago del Estero, fue la que se denominó como “Grito de Los Juríes”. Para su estudio resulta interesante tomar en consideración las dimensiones introducidas por F. Schuster para el análisis de la protesta social.

Acerca de su *historia o matriz* identitaria, se puede señalar que los pequeños productores y campesinos de la región pertenecían en su gran mayoría a la segunda o tercera generación de trabajadores forestales -en general de origen quechua- que al desaparecer los obrajes, a principios de la década de 1960, habían ocupado las tierras por ellos abandonadas; y desde entonces combinaban el trabajo temporario en las cosechas de las provincias vecinas con la producción doméstica (Michi, 2010; Pereyra, 2010). El disciplinamiento que imponía el obraje había modificado tanto su autopercepción como su

propia estima, y durante décadas la falta de respeto por su lengua vernácula había atentado sobre uno de sus principales pilares identitarios; de modo que si bien perduraban todavía algunas tradiciones ancestrales, puede decirse que esta situación había conspirado contra su conformación como agente colectivo (Pereyra, 2010). Son estos elementos los que, junto al desplazamiento y desalojo que venía perpetuándose en la provincia de Santiago del Estero desde la década de 1960, conducían a la existencia de una situación de “exclusión silenciosa” (Barbetta, 2009). Esta se correspondió con el período de latencia previo a la expresión concreta/física de la demanda por la tenencia de la tierra a través de los reclamos de los campesinos que, tal como se comentó anteriormente, comenzó a desarrollarse hacia mediados de la década de 1980, y que tuvo como emblema el “Grito de Los Jurés”. Esta primera expresión organizada de protesta, que surgió como un modo de autodefensa frente a las consecuencias de la expansión del cultivo de la soja y de la “pampeanización” de las prácticas productivas, estuvo antecedida por un avance notable del asociativismo entre los pequeños productores agropecuarios (de Dios, 2006), por la confluencia de diversas organizaciones no gubernamentales, y por las sucesivas peregrinaciones religiosas en devoción al “Señor de Mailín”, que facilitaron el proceso de movilización. De este modo, puede afirmarse que dicha experiencia tuvo como resultado la conformación de una identidad política que se constituyó en base a la identificación con la tierra, donde tuvieron una destacada intervención las organizaciones no gubernamentales y la iglesia (Barbetta, 2009).

En cuanto a sus *condiciones o configuraciones estructurales*, puede decirse que la situación de los agentes de la protesta era de una pobreza en continuo crecimiento, que producía una evidente exclusión social. La falta de crédito y apoyo a la producción, la carencia de agua para el riego, el deterioro de las rutas y caminos vecinales y provinciales, la falta de electrificación rural, y las carencias históricas en la atención y educación (Metkalf, 2004), configuraban una situación de elevada precariedad que se sumaba a los abusos y la represión ejercida por el gobierno provincial. Finalmente, en cuanto a las condiciones políticas, cabe afirmar que hacia los años 80, se presentaba una estructura de oportunidades políticas relativamente cerrada, que dificultaba el surgimiento y consolidación de organizaciones cuya acción política se contrapusiera al orden establecido (Barbetta, 2009). El “juarismo”⁵ constituía un sistema que combinaba el clientelismo político y la corrupción en la administración, con un aparato represivo y de inteligencia contra sus opositores (Michi, 2010). Eran estos elementos los que acompañaban la “exclusión silenciosa”.

Acerca de la dimensión que hace referencia a las *demandas*, puede decirse que los campesinos y pequeños productores movilizados pedían específicamente que se frenaran los desalojos, así como también exigían obtener los títulos de propiedad de las tierras sobre las que se encontraban asentados (Michi, 2010). Estas demandas fueron elevadas directamente al gobierno provincial y a los empresarios mediante una movilización histórica en la provincia, que tomó como punto de reunión la plaza central y que no dejó demasiadas alternativas de negociación; siendo que finalmente se consiguió evitar el desalojo de las familias. Las negociaciones sí se hicieron presentes a

la hora definir la superficie de los predios, dado que se les entregó en propiedad predios de entre 17 y 27 has., números muy alejados del reclamo original de 100 has. (Dargoltz, 1997).

En relación al *formato*, puede señalarse que la protesta apareció en la escena pública el 29 de octubre de 1986, cuando se congregaron en la plaza central más de 1.500 campesinos de la zona y de otros lugares de la provincia para hacer efectivo su reclamo. Se entonaron cánticos como “*La tierra es del pueblo y la va a recuperar*”, y se portaron carteles donde se podían leer mensajes como “*Sí a la tierra, no a la emigración y al éxodo*”, “*Comisión central de campesinos*” y “*Justicia para los hijos de esta tierra*” (Dargoltz, 1997). Estas consignas dejan translucir que la “vinculación con la tierra” fue el eje sobre el que se consolidó la identidad de la protesta.

Finalmente, en lo que respecta a la *performatividad*, podría afirmarse que la inscripción en el espacio público de la protesta denominada el “Grito de Los Jurés” tuvo un gran impacto político en la provincia que es posible considerar a partir de los diversos efectos -tanto materiales como simbólicos- que exhibió. Dado que, en términos materiales, logró evitarse el desalojo de las familias campesinas que a su vez pudieron conseguir la propiedad de los predios -aunque menores en extensión a lo demandado-; pero simbólicamente el impacto fue más importante ya que la protesta puso en evidencia el fin de la denominada “exclusión silenciosa”, debido a que a partir de dicha experiencia se creó la Cooperativa Agropecuaria Unión Campesina que junto con otras estructuras campesinas similares que comenzaron a conformarse, demostraron que con lucha y organización era posible modificar las condiciones de existencia de los sectores afectados, ampliando la demanda a una mejora de las condiciones de vida (Michi, 2010). De modo que, no sólo lograron obtener algunas respuestas tanto del Estado como de las empresas frente a las demandas levantadas; sino que también pudieron sentar las bases para la conformación de un movimiento organizado.

De la red de protestas al movimiento social: el MOCASE

En el contexto de conflictividad social antes presentado y ante la necesidad de resistir el embate de las grandes empresas y la represión provincial, comenzaron a conformarse en la región organizaciones campesinas de base territorial. La densificación de los núcleos de disconformidad y reivindicación con respecto a la situación del campesinado y los pequeños productores, permite hacer referencia a la conformación de una red de protestas -en los términos propuestos por F. Schuster- a nivel provincial, dado que si bien cada una de ellas poseía características particulares, adquirirían un sentido mayor en la medida que estaban emparentadas unas con otras. Esta familiaridad -que permite comprender la dimensión de su inscripción pública y de su impacto político- fue conduciendo, a través de la intensificación y de la dinamización de sus vínculos, a la conformación del MOCASE en tanto movimiento socioterritorial⁶.

Según el acta fundacional del movimiento sus principales objetivos se pueden resumir en “...*buscar soluciones a problemas comunes, para ser representante*

de los campesinos ante las autoridades, (...) apoyar las peticiones de cada una de las organizaciones que lo integran respetando su autonomía, (...) promover la capacitación en cooperativismo y gremialismo, (...) mejorar la calidad de vida de los pequeños productores” (MOCASE citado en Michi, 2010). De este modo, nuevamente resulta interesante retomar los conceptos desarrollados por F. Schuster para dar cuenta de las características principales que presenta el MOCASE como movimiento social. Por un lado, es posible reconocer una continuidad en un conjunto relativamente homogéneo de acciones colectivas que permite hablar de una identidad campesina compartida. Además, sus miembros tienen problemáticas comunes que requieren actuar hacia fuera de la organización (en contraposición al Estado), pero también implican un hacia adentro (por ejemplo a través de tareas de capacitación). En este punto puede agregarse que el movimiento nace teniendo como necesidad diferenciarse de la forma tradicional de hacer política; de modo que se constituyen en actores políticos, pero reniegan de la acción marcada por lo político-partidario (Michi, 2010).

Por otra parte, también puede afirmarse que dicha identidad campesina muestra una continuidad a través del tiempo que es posible reconstruir a pesar de sus emergencias y ocultamientos, que trasciende las transformaciones del movimiento y que guía el accionar de sus miembros. Asimismo, puede sostenerse que la lucha por la tenencia de la tierra -planteada en términos de territorio- se desarrolla a través de la acción directa de resistencia en el espacio local, y el reclamo se efectúa ante el sistema institucional -definido especialmente por la figura del Estado- (Michi, 2010).

Finalmente, cabe destacar que desde su constitución el movimiento ha evidenciado una clara expansión espacial del sistema identitario de acciones, que ha conducido a que incluso en la actualidad trascienda las fronteras provinciales para establecer vinculaciones con otras organizaciones e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional (Pereyra, 2010).

A MODO DE CONCLUSIÓN

En lo que respecta a las condiciones y desafíos que enfrenta el MOCASE en la actualidad, en tanto movimiento socioterritorial, puede mencionarse que en las últimas décadas la expansión de la frontera agropecuaria viene manifestando una aceleración sostenida. Desde los años 90, el avance sobre las tierras está directamente asociado al incremento en la producción de soja, motivada fundamentalmente por el aumento de los precios internacionales. Esta producción basada en el agronegocio, en las nuevas tecnologías agrícolas (siembra directa y doble cultivo soja/trigo) y en la utilización de semillas transgénicas, requiere de grandes extensiones de tierra (con los consecuentes desmontes) y poca fuerza de trabajo (de Dios, 2006). De este modo, y pese a haberse constituido como un actor político reconocido, de haber hecho visible la problemática a los ojos de la sociedad (local, nacional e internacional), y de haber ampliado sus vinculaciones con otros sectores sociales; puede considerarse que la lucha por la tierra sigue vigente y avanza hacia sus horas más conflictivas.

Las consecuencias a las que se enfrenta el movimiento impactan no sólo en la vida de los campesinos y pequeños productores sino de la sociedad en general; a partir de la degradación ambiental, la deforestación, la utilización de grandes cantidades de agroquímicos que afectan la fauna y flora autóctonas y contaminan las aguas, el empobrecimiento del suelo y su contaminación, el monocultivo, las migraciones de la población rural y el incremento desmesurado de precios de los alimentos básicos, etc. El conflicto encabezado por el MOCASE puede aparentar ser un conflicto local, y aún privado, en el que se oponen intereses y valores particulares; sin embargo, es una de las formas de la disputa sobre uno de los puntos nodales del capitalismo -la propiedad y el uso de la tierra-, así como también sobre un modelo de desarrollo a seguir (Michi, 2010).

Recuperando la teoría del conflicto social, si se considera que la confrontación es la condición necesaria para el aprendizaje de sí mismo y del otro, para la toma de conciencia (Izaguirre, 2003); puede señalarse que uno de los motivos por los que resulta interesante desarrollar el estudio de la acción colectiva en la Argentina contemporánea reside en que permite abordar el análisis de un momento del proceso que constituye la lucha de clases en la región, en los términos que lo propone Inés Izaguirre en *Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social* (2003), y más recientemente en *Movimiento Sociales y lucha de clases. Necesidad de reinstalar la sociogénesis conceptual en el discurso académico* (2007).

BIBLIOGRAFÍA

- Barbetta, P. (2009). *En los bordes de lo jurídico. Conflictos por la tenencia legal de la tierra en Santiago del Estero*. Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires. Disponible en: <http://www.ger-gemsal.org.ar/files/Tesis/barbetta-tesis%20doctorado.pdf>
- Barbetta, P. y Lapegna, P. (2002). Tierra y ciudadanía: el caso del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE); Argentina. *Realidad Económica*, IADE. Disponible en: <http://www.iade.org.ar/movi/articulos/moca.html>
- Barsky, O. y Dávila, M. (2008). *La rebelión del campo*, Buenos Aires: Sudamericana.
- Barsky, O. y Gelman, J. (2009). *Historia del Agro Argentino. Desde la Conquista hasta comienzos del siglo XXI*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Barsky, O. y Pucciarelli, A. (1997). *El agro pampeano. El fin de un período*. Buenos Aires: FLACSO, CBC.
- Castells, M. (1998). *La era de la información. Economía, sociedad y cultura*, Vol. 2. Madrid: Alianza.
- Dargoltz, R. E. (1997). El movimiento campesino santiagueño-MOCASE. No hay hombres sin tierras y no hay tierra sin hombres. *Revista Taller*, Vol. 2, No. 4.
- de Dios, R. E. (2006). *Diagnóstico sobre los pequeños productores, trabajadores transitorios y Pymes empobrecidas y grupos vulnerables de la Provincia de Santiago del Estero*. Santiago del Estero: Ministerio de Economía

y Producción, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Dirección de Desarrollo Agropecuario, PROINDER. Disponible en: <http://www.proinder.gov.ar/Productos/DocumentosProvinciales/Default.aspx>

Díaz, P. (2005). *Resistencia campesina en Santiago del Estero*. Informe final del concurso: Poder y nuevas experiencias democráticas en América Latina y el Caribe, Programa Regional de Becas CLACSO. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2005/demojov/diaz.pdf>

Izaguirre, I. (2003). Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social. En Seoane, J. (comp.). *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Izaguirre, I. (2007). Movimientos sociales y lucha de clases. Necesidad de reinstalar la sociogénesis conceptual en el discurso académico. En Antognazzi, I. y Redondo, N. (comp.). *Hacer la historia, un desafío*. Rosario: Edición del Grupo de Trabajo Hacer la Historia.

Manuel-Navarrete, D., et al. (2005). Análisis sistémico de la agriculturización en la pampa húmeda argentina y sus consecuencias en regiones extra-pampeanas: sostenibilidad, brechas de conocimiento e integración de políticas. *Serie Medio Ambiente y Desarrollo*, N° 118. CEPAL.

McAdam, D.; McCarthy, J. y Zald, M. (eds.). (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos*. Madrid: Istmo.

Melucci, A. (1994). Asumir un compromiso: identidad y movilización en los movimientos sociales. *Zona Abierta*, N° 69.

Metkalf, K. (2004). La lucha del MOCASE para desarrollo y autonomía. *ISP Collection*, Paper 525. Disponible en: http://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/525

Michi, N. (2010). *Movimientos campesinos y educación. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-VC*. Buenos Aires: Editorial El Colectivo.

Millán, M. (2009). Los análisis contemporáneos sobre movimientos sociales y la teoría de la lucha de clases. *Conflicto Social*, Año 2, N° 1. Disponible en: http://www.iigg.fsoc.uba.ar/conflictosocial/revista/01/0104_millan.pdf

Nun, J. (2000). *Marginalidad y exclusión social*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Pengue, W. (2009). Cuestiones económico-ambientales de las transformaciones agrícolas en las pampas. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, vol. 40, núm. 157.

Pereyra, K. (2010). Educación formal, educación popular, movimientos sociales y economía solidaria: el MOCASE y su propuesta de formación de maestros campesinos. En Dal Ri, N. M. (Org.) *Trabalho associado, economia solidária e mudança social na América Latina*. San Pablo: Editorial PROCOAS, Cultura Acadêmica Editora.

Reboratti, C. (2006). La Argentina Rural entre la modernidad y la exclusión. En: Geraiges de Lemos, A. et al. *América latina. Ciudades, campo e turismo*. San Pablo: CLACSO.

Schuster; F. (2005). Las protestas sociales y el estudio de la acción colectiva. En Schuster F.; Naishtat, F.; Nardacchione, G. y Pereyra S. (comps.). *Tomar la palabra. Estudios de protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.

Tobio, O. (2009). Consideraciones en torno a la teoría de la masa marginal: movimientos socioterritoriales y mercados de trabajo en el norte de Salta. *Actas del 12º Encuentro de Geógrafos de América Latina*. Montevideo: 3 al 7 de abril de 2009. Disponible en:

http://egal2009.easyplanners.info/area02/2205_Tobio_Omar.doc

Vía Campesina (2011) Sitio Oficial de la Vía Campesina. Disponible en: http://www.viacampesina.org/sp/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=44

¹Según M. Millan: “...La noción de movimiento social es abarcativa de la de acción colectiva y no a la inversa. Para que haya movimiento social debe haber acción colectiva, pero para que esta ocurra, no es preciso un movimiento social...” (Millan, 2009:69).

²Según los datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002 puede afirmarse que el número de EAPs campesinas era del orden del 67,80 % del total provincial (de Dios, 2006).

³Conformada por las siguientes organizaciones: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y FAA.

⁴Adopta dicha denominación en alusión a su pertenencia a la organización internacional de mismo nombre que agrupa a campesinos, pequeños y medianos productores, sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Tiene como objetivo defender la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la dignidad, oponiéndose a los agronegocios y las multinacionales (Vía Campesina, 2011).

⁵La provincia fue gobernada desde mediados del siglo XX por Carlos Juárez; en forma directa (cuatro ocasiones) y a través de testaferros políticos. Durante este período se alternaron gobiernos generados por elecciones, intervenciones federales y gobiernos de facto (Michi, 2010).

⁶Siguiendo a M. Fernandes (citado en Tobio, 2009) “...movimiento social y movimiento socioterritorial son un mismo sujeto colectivo o grupo social que se organiza para desarrollar una determinada acción en defensa de sus intereses, en posibles enfrentamientos y conflictos, con el objetivo de la transformación de la realidad. Por lo tanto no existen ‘uno y otro’. Existen movimientos sociales desde una perspectiva sociológica y movimientos socioterritoriales o movimientos socioespaciales desde una perspectiva geográfica...” (Tobio, 2009).